

Durante la reunión con la Secretaría General de Agricultura, Isabel García Tejerina

El Ministerio se compromete con el sector citrícola a dar la batalla en Bruselas contra la “Mancha Negra” sudafricana

Los productores califican de “bochornosa” la gestión de la UE en 2013 y alertan del riesgo de contaminación para las plantaciones europeas. “No pedimos barreras comerciales contra Sudáfrica. Exigimos protección fitosanitaria efectiva en frontera”.

Madrid, 12 de Febrero.- Durante la reunión mantenida el lunes con la Secretaria de Agricultura, Isabel García Tejerina, los representantes del sector citrícola español, de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ASAJA, COAG, UPA, Comité de Gestión de Cítricos y Ailimpo, demandaron al Ministerio que redoble y acelere sus esfuerzos, ante el inminente inicio de la campaña, para obtener en Bruselas, las medidas necesarias de protección de las plantaciones citrícolas frente a la gravísima amenaza fitosanitaria que entrañan las importaciones de cítricos contaminados por “Mancha Negra” desde Sudáfrica.

Los representantes recordaron el fiasco cometido por la Administración comunitaria a lo largo de la precedente campaña, cuando la Comisión, a pesar de mantener una posición inicialmente firme antes de la campaña de importación (estableciendo un umbral de 5 interceptaciones por encima del cual se aplicarían medidas de salvaguardia), dio posteriormente marcha atrás, adoptando una actitud permisiva y condescendiente con la Administración Sudafricana, llegando a dictar el cierre parcial de la frontera en diciembre, cuando las exportaciones habían finalizado. “La experiencia de 2013 fue bochornosa e insultante, pero debe servir para aprender la lección, para comprobar que estamos tratando con un gobierno que o no quiere o no puede controlar la sanidad de sus plantaciones ni de sus envíos de fruta a Europa con unas mínimas garantías”, han declarado los representantes sectoriales.

Para defender las plantaciones comunitarias, es imprescindible un mecanismo cautelar efectivo, automático, contundente e ineludible. Así lo demandaron hasta la saciedad a lo largo del pasado año, no sólo los citricultores españoles, sino, unánimemente, todas las organizaciones representativas del sector, tanto de España, como de Europa, tanto las cooperativas, los productores, como el comercio y los propios importadores.

La Secretaria General de Agricultura se comprometió a reclamar que Bruselas establezca cuanto antes, medidas de aplicación para la campaña 2014. Ministerio y Sector coincidieron en señalar que el número de interceptaciones a lo largo de la campaña 2013 y anteriores sería motivo más que suficiente para que la Comisión prohíba cualquier importación citrícola de ese país desde ya mismo y en tanto en

cuanto las instituciones comunitarias no verifiquen por sí mismas en origen -y no a través de la "palabra" de la administración sudafricana- la situación fitosanitaria del país.

El sector respeta que la Comisión y los Estados miembro tengan un ritmo diferente en su toma de decisiones. Pero el tiempo corre en su contra y no aceptarán una estrategia deliberadamente dilatoria, ni que los análisis objetivos y las advertencias de los científicos sean de nuevo eclipsados por presiones comerciales, políticas o diplomáticas. "Estamos jugando con fuego: de momento no ha ocurrido, pero nos encontramos totalmente expuestos y la contaminación puede llegar en cualquier momento; no lo decimos nosotros, lo señalan los análisis que hasta la fecha ha realizado la EFSA", insistieron los asistentes a la reunión. Añaden que la Comisión está prevenida, por lo que sería una irresponsabilidad imperdonable minusvalorar o ignorar este riesgo.

Un riesgo que amenaza a la supervivencia de las 500.000 Has de plantaciones citrícolas europeas, al desarrollo económico y social de las regiones productoras; a la garantía de abastecimiento de los consumidores europeos y a las posibilidades de exportación hacia otros mercados que sí se muestran inflexibles ante la mínima posibilidad de contaminación, como EEUU. Está en juego, finalmente, la credibilidad de la Comisión y la eficacia de la política fitosanitaria comunitaria.